

Pereira, 20 de marzo de 2026

Señor

**JUEZ DE TUTELA (Reparto)**

Pereira, Risaralda

**REFERENCIA: ACCIÓN DE TUTELA**

**ACCIONANTE: LUZ AMPARO ARANGO LANCHEROS actuando como agente oficioso de PRUDENCIA LANCHEROS ARANGO**

**ACCIONADO: ASMET SALUD EPS**

Yo, **LUZ AMPARO ARANGO LANCHEROS** mayor de edad identificada con cedula de ciudadanía No. 42019358, actuando como agente oficioso de mi madre la señora **PRUDENCIA LANCHEROS ARANGO** identificada con numero de ciudadanía 34.043.678, me dirijo a usted con el objeto de instaurar **ACCIÓN DE TUTELA**, según lo consagra en el artículo 86 de la Constitución Nacional, contra **ASMET SALUD EPS** toda vez que considero se están vulnerando los derechos fundamentales a la **SALUD, VIDA Y DIGNIDAD HUMANA**, fundamento esta acción en los siguientes términos:

### **HECHOS**

1. Actualmente la señora **PRUDENCIA LANCHEROS ARANGO** es una mujer adulta mayor de 77 años de edad la cual es beneficiaria de la entidad prestadora de salud ASMET SALUD EPS
2. Conforme a Historia clínica ella se encuentra diagnosticada con DISLIPIDEMIA, ARTRITIS REUMATOIDE SIN SGTO.
3. Es por las condiciones anteriores que bajo orden medica se le plantean realizar los procedimientos médicos denominados ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO
4. Advertir que se han adelantado todas las solicitudes antes las IPS correspondientes, para que a mi madre le realicen el procedimiento, pero tan solo he recibido la negativa, esto a que según ellos se encuentra en lista de espera relativa de 3 a 6 meses de espera aproximadamente.

5. Mencionar de igual manera que, debido a la edad avanzada de mi madre, su estado a empeorado, teniendo episodios de recaída en términos de salud, encontrándose en estos momentos en una situación de vulnerabilidad, sin una solución aparente por parte de la EPS
6. Que la señora **PRUDENCIA LANCHEROS ARANGO**, por su condición de adulta mayor, ostenta la calidad de sujeto de especial protección constitucional, lo que impone al Estado y a las entidades del sistema de salud el deber reforzado de garantizarle una atención integral, continua, eficiente y sin barreras administrativas.
7. Así las cosas, a la fecha no se ha llevado a cabo el dicho procedimiento medico, y como puede ver, Señor Juez de Tutela, no disponemos de otro medio o mecanismo para hacer valer nuestros derechos fundamentales, mi madre se encuentra en una situación muy vulnerable, y la negación sistemática y reiterativa del servicio de salud, me impide un adecuado tratamiento médico garantizándome una VIDA DIGNA. Por consiguiente, sus derechos fundamentales están amenazados y vulnerados, es por ello señor juez que radica la inconformidad y este es el motivo que impulsa la acción de tutela.

### **DERECHOS QUE SE VULNERAN O AMENAZAN**

Es lo primero dejar sentada la posición que la Acción de Tutela incoada se interpone como mecanismo de protección de sus Derechos Fundamentales, contra la omisión desplegada por ASMET SALUD EPS

### **DERECHOS VULNERADOS**

**SALUD, LA VIDA, DIGNIDAD HUMANA, SEGURIDAD SOCIAL, INTEGRIDAD PERSONAL Y DEL PRINCIPIO DE CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.**

Así mismo, la Corte Constitucional ha sido enfática en afirmar que el servicio de salud, entre otros, debe obedecer a los principios de continuidad y progresividad “Una de las características de todo servicio público, atendiendo al mandato de la prestación eficiente (Art. 365 C.P.), la constituye su continuidad, lo que implica, tratándose del derecho a la salud, **su prestación ininterrumpida, constante y permanente, dada la necesidad que de ella tienen los usuarios del Sistema General de Seguridad Social.** Sobre este punto, la Corte ha sostenido que una vez haya sido iniciada la atención en salud, debe garantizarse la continuidad del servicio, de manera que el mismo no sea suspendido o retardado, antes de la recuperación o estabilización del paciente. **Asimismo, este derecho**

**constitucional a acceder de manera eficiente a los servicios de salud no solamente envuelve la garantía de continuidad o mantenimiento del mismo, también implica que las condiciones de su prestación obedezcan a criterios de calidad y oportunidad.”**

**De igual forma en su reiterada jurisprudencia, la Honorable Corte Constitucional ha manifestado la importancia del criterio de necesidad con respecto al tratamiento solicitado por el paciente, pues este no debe tener un carácter caprichoso. Tal principio de necesidad lo establece el médico tratante en su orden o tratamiento a realizar. Sentencia T-345 de 2013 M.P MARÍA VICTORIA CALLE CORREA;** “La Corte ha resaltado que, en el Sistema de Salud, quien tiene la competencia para determinar cuándo una persona requiere un procedimiento, tratamiento, o medicamento para promover, proteger o recuperar su salud es, **prima facie, el médico tratante, por estar capacitado para decidir con base en criterios científicos y por ser quien conoce de primera mano y de manera detallada la condición de salud del paciente.** La importancia que le ha otorgado la jurisprudencia al concepto del médico tratante se debe a que éste (i) es un profesional científicamente calificado; (ii) es quien conoce de manera íntegra el caso de su paciente y las particularidades que pueden existir respecto de su condición de salud y (iii) es quién actúa en nombre de la entidad que presta el servicio.” (Negrita fuera de texto)” “En relación con el derecho a la salud de las personas que hacen parte del grupo de los sujetos de especial protección constitucional es preciso considerar que a partir de normas constitucionales como los artículos 13, 44, 46 y 47, se impone mayor celo en el cumplimiento de los deberes de protección y garantía por parte de las autoridades y de los particulares en la atención de las enfermedades o alteraciones de salud que padezcan. Dentro de tales destinatarios se encuentran los niños, niñas y adolescentes y las personas de la tercera edad.”

**Dicho sea de paso, la Corte Constitucional ha sido reiterativa en afirmar que los usuarios no pueden ver diezmado su derecho al a SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL, por tramites meramente administrativos, o barreras burocráticas, que los imposibilitan a acceder de manera satisfactoria a sus derechos; se debe recordar la sentencia T 188 de 2013 que indicó**

“La jurisprudencia de esta Corte al analizar las diferentes vulneraciones al derecho a la salud, ha evidenciado que los usuarios se tienen que enfrentar a múltiples trabas administrativas y burocráticas para poder acceder a la prestación del servicio de salud. Estas barreras atrasan la prestación del servicio, aumentan el sufrimiento de las personas y muchas veces tiene consecuencias graves en la salud de los usuarios, como las siguientes: a) Prolongación del sufrimiento, que consiste en la angustia emocional que les produce a las personas tener que esperar demasiado tiempo para ser atendidas y recibir tratamiento; b) Complicaciones médicas del estado de Salud, esto se debe a que la persona ha tenido que esperar mucho tiempo para recibir la atención efectiva, lo cual se refleja en el estado de salud debido a que la condición médica empeora; c) Daño permanente, cuando ha pasado demasiado tiempo entre el

momento en que la persona acude al servicio de salud y hasta el momento en que recibe la atención efectiva, empeorando el estado de salud y por lo tanto generándole una consecuencia permanente o de largo plazo; d) Discapacidad permanente, se da cuando el tiempo transcurrido es tal entre el momento que el paciente solicita la atención y hasta cuando la recibe, que la persona se vuelve discapacitada; e) Muerte, esta es la peor de las consecuencias, y se puede dar cuando la falta de atención pronta y efectiva se tarda tanto que reduce las posibilidades de sobrevivir o cuando el paciente necesita de manera urgente ser atendido y por alguna circunstancia el servicio es negado. Sin duda alguna la imposición de barreras administrativas y burocráticas, que impiden la prestación, pronta, adecuada y efectiva del servicio de salud tiene consecuencias perjudiciales en la salud de las personas, y en la medida en que las condiciones del paciente empeoren, necesitará una mejor atención o la prestación de servicios de mayor complejidad, lo que implicará una erogación económica mayor a la inicialmente requerida de haberse prestado el servicio de manera oportuna y con calidad.

### **El derecho a la salud de las personas mayores o de la tercera edad. Reiteración de jurisprudencia. Sentencia T 264/23.**

(...) En relación a la universalidad, otra de las características del derecho a la salud, la sentencia SU-508 de 2020 hizo una aclaración, en el sentido de indicar que, el establecer acciones afirmativas en favor de las personas de la tercera edad, como sujetos de especial protección constitucional, no desconoce ese postulado; en similar sentido, la sentencia T-338 de 2021 señaló que esta parte de la población “afronta debilidades para desarrollar ciertas funciones y actividades. Como consecuencia de ello, estas personas resultan inmersas en situaciones de exclusión en el ámbito económico, social y cultural. De manera que, es necesario adoptar medidas que permitan suprimir esas barreras para garantizar la igualdad material de esa población”.

De la misma manera, la sentencia SU-508 de 2020 indicó que el carácter de especial protección supone “que los derechos fundamentales de los adultos mayores deben interpretarse en concordancia con el principio de dignidad humana y con la Observación General No. 14 proferida por el Comité de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, [instrumento internacional] que orienta la interpretación del derecho a la salud de personas en situación de vulnerabilidad. Asimismo, consideró que la protección de sus derechos es prevalente. Es decir, tiene una relevancia trascendental. Más adelante, la sentencia T-221 de 2021 sostuvo que los servicios de salud que lleguen a necesitar los individuos en su última etapa de vida serán garantizados de manera continua, permanente, oportuna y eficiente, en atención, entre otras cosas, al deber de protección y asistencia consagrado en el artículo 46 superior. Recientemente, la Ley 2055 de 2020 incorporó en la legislación interna la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada en Washington DC, el 15 de junio de 2015, en la que se resalta “que la persona mayor tiene los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas”. También que

“la persona mayor tiene derecho a su salud física y mental, sin ningún tipo de discriminación”. Recalca en que: “se deberán diseñar e implementar políticas públicas intersectoriales de salud orientadas a una atención integral que incluya la promoción de la salud, la prevención y la atención de la enfermedad en todas las etapas, y la rehabilitación y los cuidados paliativos de la persona mayor a fin de propiciar el disfrute del más alto nivel de bienestar, físico, mental y social”. Por tanto, se puede afirmar que hay normas internacionales vinculantes para el Estado colombiano, en materia de protección del adulto mayor y de personas de la tercera edad, en todos los ámbitos de su vida, incluyendo el de la salud, porque goza de los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas, en los que la dignidad y la igualdad son inherentes a todo ser humano.

### **FUNDAMENTOS DE DERECHO Y JURISPRUDENCIALES**

**Artículo 49 de la Constitución Política de Colombia:** consagra el derecho a la salud.

**Artículo 2°. Ley Estatutaria 1751 DE 2015** que consagra la Naturaleza y contenido del derecho fundamental a la salud.

**Artículo 25 Declaración UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS,** que consagra el Derecho a la salud y al bienestar.

**Sentencia T-121/15 - 3.3. Del derecho fundamental a la salud: naturaleza, elementos, principios y derechos que de él emanan. Reiteración de jurisprudencia**

**Sentencia T-121/15 - SERVICIOS MEDICOS Y SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS-Prestación en condiciones de oportunidad, eficiencia y calidad**

**Sentencia T-234/13 - DERECHO DE ACCESO AL SISTEMA DE SALUD LIBRE DE DEMORAS Y CARGAS ADMINISTRATIVAS QUE NO LES CORRESPONDE ASUMIR A LOS USUARIOS.**

### **FUNDAMENTOS DE LA ACCION**

Fundo esta acción en lo preceptuado por el artículo 86 de la Constitución Nacional, en concordancia con lo establecido por los decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992 y demás normas complementarias y concordantes.

### **PRETENSIONES**

- 1.** Se declare la vulneración y SE TUTELEN los derechos fundamentales a la **SALUD, VIDA, Y DIGNIDAD HUMANA, QUE ASISTEN A LA SEÑORA PRUDENCIA LANCHEROS ARANGO**
- 2. ORDENAR a ASMET SALUD EPS** representada legalmente por quien haga sus veces, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo, PROCEDA A GARANTIZAR, ORDENAR la realización efectiva del procedimiento medico denominado ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO
- 3. ADVERTIR a ASMET SALUD EPS,** tal como lo señaló la Corte Constitucional en su Sentencia T-610 de 2013, “no continuar desconociendo caprichosamente y sin razón válida, los precedentes jurisprudenciales de esta corporación en cuanto a la aplicación de cada una de las subreglas, las cuales propenden por la prestación adecuada y eficiente del servicio de salud”. Recordándole a dicha entidad “el deber de acatar y aplicar todos los lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la mencionada materia, pues no se encuentra justificación alguna para que tales entes continúen desconociendo sus deberes.

### **COMPETENCIA**

Es usted competente para conocer de esta acción por la naturaleza del asunto y la calidad del demandado.

### **ANEXOS**

Con el fin de sustentar lo manifestado en la presente solicitud, me permito anexar los siguientes documentos:

1. Fotocopia de mi cedula de ciudadanía.
2. Fotocopia cedula de ciudadanía Prudencia Lancheros Arango
3. Historia Clínica
4. Orden medica relacionada

### **JURAMENTO**

Bajo la gravedad del juramento manifiesto que no he interpuesto acción de tutela, ni mi representada, ante otra autoridad por estos mismos hechos.

**DIRECCIONES Y NOTIFICACIONES:**

**Celular:** 3206855636

**Correo:** luzamparoarangelancheros69@gmail.com

**Dirección:** Vereda la Bananera, finca La María.

Atentamente,

**LUZ AMPARO ARANGO LANCHEROS**

Cedula de ciudadanía No. 42.019.358 de Dosquebradas.